



**RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS POR LA QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Nº 001-001917 REALIZADA POR [REDACTED] EN APLICACIÓN DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.**

1º. Con fecha 24 de abril de 2015 tuvo entrada en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número de expediente 001-001917 y que tiene como asunto "Informes de la IGAE sobre revocación de ayudas a empresas mineras (ampliación)", y en la que, de acuerdo con la expresión "la generalidad de las empresas" utilizada en la Resolución de este organismo de 26 de marzo de 2015, se reitera por parte de [REDACTED] la posibilidad de acceder a los informes citados.

2º. El día 25 de octubre de 2015 se registró la entrada de una nueva petición de [REDACTED], con el número de expediente 001-003411, en la que solicitaba explicaciones sobre los motivos por los cuales la solicitud anterior, y otras formuladas por el mismo interesado, no habían sido atendidas en el plazo reglamentario.

En la medida en que esta segunda solicitud reitera peticiones anteriores, atendiendo a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que admite la acumulación de los procedimientos que guarden identidad sustancial o íntima conexión, se considerará acumulada parcialmente en las distintas resoluciones que se adopten sobre el acceso a la información requerida.

En consecuencia, por medio del presente escrito se resuelve la consulta previa que se formuló con número de expediente 001-001917 y, parcialmente, la solicitud registrada con el número de expediente 001-003411, en lo que se refiere a la solicitud anterior.

3º. En la Resolución de 26 de marzo de 2015, -por la que se resuelve la solicitud de acceso a la información pública nº 001-000332 realizada por [REDACTED] en aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno-, se empleó la expresión "la generalidad de las empresas" porque la totalidad de las empresas que se manifestaron en el trámite de audiencia, otorgado en virtud de lo previsto en el artículo 19.3 de la referida Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se opusieron a dar acceso a la



información requerida en defensa de sus intereses económicos y comerciales. Ello condujo a que se considerase, respecto de aquellas que no lo hicieron, que sin una autorización expresa no podía facilitarse esa información dado el carácter sensible de la misma.

4º. En virtud de lo anterior, se estima que resulta aplicable a esta nueva solicitud lo ya señalado en la Resolución de 26 de marzo de 2015, por la que se resuelve la solicitud de acceso a la información pública nº 001-000332 realizada por [REDACTED] en aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

A la vista de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en la letra h) del artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se deniega el acceso a la información pública cuya solicitud tuvo entrada en este organismo con fecha 24 de abril de 2015, quedando registrada con los números 001-001917 y 001-003411, en los términos expresados en el apartado segundo de este escrito, por considerar que podría suponer un perjuicio en los intereses económicos y comerciales del conjunto de las empresas afectadas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

Madrid, 18 de diciembre de 2015

EL PRESIDENTE

Alberto Nadal Belda